



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS**
Edificio Banco de la Republica Oficina 901 Teléfono 2616718
jcctoersrt@liba@notificacionesrj.gov.co
Ibagué – Tolima

Ibagué (Tolima), julio veintiuno (21) de dos mil quince (2015)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Proceso Especial : Solicitud de Restitución y Formalización de Tierras (Prescripción)
No. Radicación : 73001-31-21-001-2014-00270-00
Solicitante : Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima en nombre y Representación de **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**.

ASUNTO OBJETO DE DECISIÓN

Por cumplirse a cabalidad los preceptos establecidos en la ley 1448 de 2011, procede el Despacho a proferir la decisión de fondo que en derecho corresponda, respecto de la **SOLICITUD de RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS** instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, en nombre y representación de la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.954.756 expedida en Santa Isabel (Tol) y su núcleo familiar para la época del desplazamiento, quien ostenta la calidad de víctima y solicitante **POSEEDORA** del predio denominado Registralmente "**LOTE LAS BRISAS**", y Catastralmente "**CASA LOTE**", distinguido con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **364-23304** y Código Catastral No. **00-01-0001-0102-000**, ubicado en la Vereda **DELICIAS DEL CONVENIO**, del Corregimiento **CONVENIO**, del municipio de **LÍBANO (Tol)**, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La Dirección Territorial Tolima de la Unidad de Restitución de Tierras, en desarrollo y aplicación del artículo 105 y subsiguientes de la Ley 1448 de 2011, incluye dentro de sus funciones, entre otras las siguientes: diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente; incluir y certificar la inscripción de las víctimas en el registro de tierras despojadas, oficiosamente o a solicitud de parte; igualmente, acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados para presentarlas en los procesos de restitución y formalización; finalmente, tiene la facultad de tramitar ante las autoridades competentes y a nombre de los titulares de la acción de restitución y formalización de tierras, la solicitud de que trata el artículo 83 de la precitada ley.

1.2.- Bajo este marco normativo, la mencionada entidad expidió la **CONSTANCIA No. NI 0095** de julio 28 de 2014, obrante a folio 23, mediante la cual se acreditó el **REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD** establecido en el inciso 5º del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, es decir, que se comprobó que la señora

179

MARÍA ADALINDA LÓPEZ, se encuentra inscrita como víctima en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, ostentando la relación jurídica de **POSEEDORA** respecto del predio solicitado en restitución, denominado **CASA LOTE LAS BRISAS**.

1.3.- En el mismo sentido, obra la **Resolución RI No. 2152** de noviembre 28 del año 2014, visible a folios 21 y 22, a través de la cual la citada Unidad, asumió la representación judicial de la solicitante **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, conforme a los preceptos consagrados en los artículos 81, 82 y numeral 5° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, quien acudió a la jurisdicción de tierras, a fin de obtener la restitución y formalización del inmueble adscrito a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Líbano (Tolima), el cual se encuentra descrito, individualizado e identificado en la parte inicial de esta decisión.

1.4.- Al respecto, la solicitante **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, manifestó que su abuela señora **MARÍA ESTRELLA LÓPEZ** (q.e.p.d.), adquirió el fundo objeto de restitución mediante compraventa suscrita con el señor **ELISEO OLAYA**, a través de la escritura pública No. 291 de mayo 5 de 1944 corrida ante la Notaría Única del Círculo de Líbano, debidamente inscrita en la precitada Oficina Registral en junio 3 de 1944 y que consta en la anotación No. 1 del folio de matrícula No. 364-23304.

Agrega que su abuela falleció en el año 1972, fecha desde la cual ella junto con su madre **ADALINDA LÓPEZ** a quien tenía bajo su cuidado y sus hermanos **LUIS FERNANDO** y **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, iniciaron la explotación directa de dicho inmueble con ánimo de señor y dueño, sin reconocer mejor derecho en cabeza de persona distinta.

Indica que al fenecer su señora madre en mayo 18 de 1999, sus hermanos dejan de habitar el predio, quedando única y exclusivamente la solicitante en cabeza del mismo, aclarando que dicha posesión la ejercía a nombre propio y de sus hermanos. Refiere que construyó una vivienda en el inmueble a orilla de carretera, tenía una caseta donde vendían productos cosechados y ofrecía venta de alimentos preparados, poseía gallinas y cerdos, cultivaba plátano y café, y asumía el pago de los servicios públicos.

Relata que en el año 2001, recibió amenazas de grupos paramilitares que la acusaban de ser colaboradora de la guerrilla, exigiéndole que se fuera de su casa, a lo cual se negó, por lo que en consecuencia a principios del año 2002, al regresar a su casa luego de comercializar unos plátanos en el casco urbano del municipio de Líbano, encontró que miembros de dicha facción sediciosa tenían encañonada a su hija y nietas, dándole el término de dos (2) horas para salir de su casa, debiendo desplazarse junto con su familia en ese mismo instante en un camión que transportaba plátanos hacia la ciudad de Bogotá, viéndose obligada a abandonar de manera permanente su predio, limitando de manera ostensible y palmaria su relación con el mismo. Ya en Bogotá, reciben la caridad de algunas personas y declara ante la Personería en mayo 28 del precitado año 2002.

Finalmente, se informa que el hermano de la solicitante señor **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, quien actualmente ocupa el predio, no se opone a la solicitud presentada y solicita que dicho reconocimiento se haga extensivo a él como poseedor.

II. PRETENSIONES:

180

2.1.- En el libelo con que se dio inicio a la presente solicitud, se incoaron en forma simultánea, principales, subsidiarias y especiales, que sucintamente se refieren a lo siguiente:

Que se RECONOZCA la calidad de víctima y el derecho fundamental de restitución de tierras a que tiene derecho la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, y demás miembros de su núcleo familiar, en virtud de la posesión que han ejercido sobre el predio denominado Registralmente como LOTE LAS BRISAS y Catastralmente llamado CASA LOTE, en los términos establecidos por la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-821 de 2007.

Que se DECRETE a favor de la solicitante y los miembros de su núcleo familiar la prescripción adquisitiva de dominio respecto del fundo denominado Registralmente como LOTE LAS BRISAS y Catastralmente llamado CASA LOTE, ordenando registrar la sentencia y la cancelación de los antecedente registrales en los términos señalados en el literal c del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Líbano (Tolima).

ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- la actualización individualización e identificación del predio, con base en el levantamiento topográfico e informe técnico catastral realizado.

ORDENAR la condonación y exoneración de impuestos y el alivio de las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios, adeude la víctima a las empresas prestadoras de los mismos, desde la ocurrencia del hecho victimizante hasta la fecha de proferimiento de la sentencia de restitución de tierras.

Se ORDENE al Banco Agrario el otorgamiento tanto del subsidio de vivienda de interés social rural, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1 del Artículo 8 del Decreto 2675 de 2005, modificado por el Artículo 2 del Decreto 094 de 2007, como la implementación de un proyecto productivo que se adecue de la mejor forma a las características del inmueble.

Subsidiariamente, se solicita que de tornarse imposible acceder a la restitución del inmueble despojado, se otorgue la compensación prevista por el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con lo dispuesto por el literal k del Artículo 91 de la precitada Ley.

III.- ACTUACIÓN PROCESAL

3.1.- FASE ADMINISTRATIVA. El apoderado de la solicitante una vez se acreditó el requisito de procedibilidad exigido en el inciso quinto del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el artículo 13 Numeral 2º del Decreto 4829 de 2011, dio inicio formal a la etapa administrativa, radicando la solicitud en la oficina judicial, el 15 de diciembre de 2014, anexando entre otros, los documentos relacionados en el acápite de pruebas del libelo.

3.2.- FASE JUDICIAL. Mediante auto calendaro enero 16 del año 2015, el cual obra a folios 28 a 29 vuelto, éste estrado judicial admitió la solicitud por estar cumplidos a cabalidad los requisitos de Ley, ordenando simultáneamente entre otras cosas, la inscripción de la misma en el folio de matrícula inmobiliaria No. 364-23304; la orden para dejar fuera del comercio temporalmente el predio, como lo establece el literal b) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011; la suspensión de los procesos que tuvieran relación con el inmueble objeto de restitución, excepto

los de expropiación; la notificación personal tanto de la providencia admisorio como del libelo de la petición a los señores **LUIS FERNANDO** y **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, hermanos de la solicitante, y con auto de enero 27 de 2015, se ordenó el emplazamiento de las **PERSONAS INDETERMINADAS** que crean tener derechos o que se sientan afectadas con la restitución.

3.2.1.- Conforme lo dispuesto en el numeral 7.- del mencionado auto admisorio y la providencia de enero 27 de 2015, la Unidad Territorial Tolima, aportó la certificación de emisión radial efectuada en la emisora 100.0 de la Policía Nacional (Fls.106 y 107) y además las publicaciones dirigidas a los anteriormente emplazados y a todas las personas que se consideraran con derecho a intervenir en el proceso, tal y como consta en las ediciones del periódico El Tiempo, realizadas los días domingo 1º de febrero de 2015 (Fls.81 a 82), domingo 8 de febrero de 2015 (Fls.96 a 97), y domingo 26 de abril de 2015 (Fls.148 a 149).

3.2.2.- Asimismo, el apoderado de la solicitante dando cumplimiento a lo ordenado en las providencias antes mencionadas, y lo solicitado en auto de febrero 5 de 2015 (Fl.60), informa que la señora **ADALINDA LÓPEZ (q.e.p.d.)**, madre de la aquí solicitante, era una persona discapacitada; que siempre vivió en el campo y nunca tramitó su cédula de ciudadanía, y ante la dificultad de encontrar datos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aporta las partidas de bautismo de ella y su hermano **JOSÉ FERNANDO**, como prueba del vínculo de parentesco con sus fallecidas madre y abuela, pero sin que registre números de identificación de éstas (Fls.100 y 101), copia de la escritura pública No. 291 de mayo 5 de 1944, mediante la cual la señora **MARÍA ESTRELLA LÓPEZ (q.e.p.d.)** adquiere el predio, sin número de identificación claro y con la anotación de no saber firmar (Fls.102 a 103), aduciendo finalmente que la solicitud fue presentada como poseedora y cumple todos los requisitos de esta.

3.2.3.- De otra parte, aporta copia del acta de notificación personal y traslado al señor **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, hermano de la solicitante y quien habita actualmente el predio pedido en restitución tal como obra a folio 104. En cuanto a **LUIS FERNANDO LÓPEZ**, aclaran que su verdadero nombre es **LUIS ARNULFO LÓPEZ**, corrigiendo el error involuntario en que se incurrió al presentar la solicitud. Igualmente, indica el desconocimiento del paradero del mismo, desde el momento en que éste enajenara sus derechos a la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, razón por la cual no se le notificó dicha providencia. (Fls.98 a 99).

3.3.- INTERVENCIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. En acatamiento de los preceptos establecidos en el literal d) del art. 86 de la Ley 1448 de 2011, se notificó al señor Procurador para Restitución de Tierras, quien no hizo pronunciamiento alguno.

IV. CONSIDERACIONES

IV.1.- JUSTICIA TRANSICIONAL.

IV.1.1.- Tal y como se dijera en el auto admisorio de la presente solicitud, respecto de esta figura jurídica el legislador colombiano plasmó en el artículo 8º de la Ley 1448 de 2011, la siguiente definición: "**ARTICULO 8º JUSTICIA TRANSICIONAL.** Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad para garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible".

101

IV.1.2.- Para arribar al anterior precepto legal, se tuvieron en cuenta experiencias internacionales, que concibieron la **JUSTICIA TRANSICIONAL** como el conjunto de mecanismos implementados por algunas sociedades que han enfrentado los legados de violaciones masivas a derechos humanos ocurridas con ocasión de conflictos armados o regímenes dictatoriales. Es así, como el **Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas "ONU"** hizo a través de su Secretario General, un pronunciamiento en el año 2004, sobre el **Estado de Derecho y Justicia Transicional** en sociedades en conflicto y posconflicto, que la define de la siguiente forma:

"[...] abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados y con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos".

IV.1.3.- Armónicamente con lo ya discurrecido, el suscrito juez considera que la justicia transicional, es el instrumento jurídico creado por el legislativo, como parte del andamiaje que desde un punto de vista macro, conforma el marco legal para ir estructurando la columna vertebral para la paz, y que es consecuencia directa de una serie ininterrumpida de actos de violencia, barbarie y terrorismo generalizado, realizados en forma indiscriminada por grupos armados ilegales que desde hace más de cinco décadas han venido desangrando nuestro país.

IV.1.4.- PROBLEMA JURÍDICO

IV.1.4.1.- La inquietud por resolver, consiste en establecer si en aplicación de la justicia transicional emanada de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con otras normatividades reguladoras de la materia, como son el Código Civil y la Ley 791 de 2002 modificatoria de la **PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA**, es posible acceder a la solicitud de formalización, previo reconocimiento de la calidad de poseedora que ostenta la solicitante dentro de la presente acción, lo cual permitirá estudiar si la referida se hace acreedora a la **adquisición del derecho de dominio por vía de prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria**, respecto de las tierras despojadas que tiene en posesión, advirtiendo que ni en la etapa administrativa ni en la judicial se presentó oposición. Por último, el Despacho deberá igualmente analizar la posibilidad de acceder a la eventual concesión de la **COMPENSACION** incoada en forma subsidiaria.

IV.1.4.2.- Para dirimir el asunto, el Despacho se valdrá de las leyes sustantivas ya referidas y pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que abordaron el estudio de uno de los flagelos más grandes que agobia nuestro país, como es el desplazamiento forzado, el cual se convirtió en el principal drama humanitario de Colombia en los últimos años. En cuanto a la expectativa de lograr la adjudicación, se aplicará la normatividad establecida por la legislación vigente reguladora de la **ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO**, por vía de la **PRESCRIPCIÓN ORDINARIA o EXTRAORDINARIA** y en lo pertinente la Ley 1448 de 2011, que contempla unas especiales características, que son sui generis, respecto de otras legislaciones.

IV.2.- MARCO NORMATIVO.

IV.2.1.- Desde el mismo diseño constitucional, Colombia buscó proteger amplia y suficientemente los derechos de las víctimas, siendo así que dentro del segmento de los derechos fundamentales que consagra la Carta, artículos 11 y subsiguientes, se encuentran subsumidos los de la primacía de los derechos de la persona y protección de la familia, en los que obviamente se incluyen todos aquellos que estén en situación de desplazamiento forzado. En el mismo sentido, el artículo 2º de la Carta, estatuye como fines esenciales del Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los derechos, atendiendo que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Es así, que armónicamente desde el punto de vista constitucional, los diversos órganos y entidades del Estado, se han repartido multiplicidad de funciones, con finalidades específicas, como las de satisfacer y contribuir efectivamente con el derecho a la reparación de las víctimas despojadas, por lo que procedió a construir la plataforma administrativa y jurídica suficiente para ello, expidiendo los procedimientos y herramientas necesarias, para así permitir que todos aquellos que se vieron forzados a desarraigarse como consecuencia de hechos de violencia, tuvieran la oportunidad de retornar, previa devolución del terruño que se vieron obligados a abandonar.

IV.2.2.- Dado el desbordamiento de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, la Corte Constitucional asumió con toda entereza el estudio y análisis de dicha problemática, profiriendo en consecuencia diversos pronunciamientos entre ellos las sentencias T-025 de 2004, T-585 de 2006, T-821 de 2007, T-297 de 2008, T-068 de 2010 y T-159 de 2011, en las que se resaltan como principales razones para declarar el estado de cosas inconstitucional, entre otras las siguientes:

T-025 de 2004. "(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derecho, se produciría una mayor congestión judicial. Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente."

T-585 de 2006. "...en suma, el derecho a un vivienda digna – como derecho económico, social y cultural – será fundamental cuando (i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares".

T-754 de 2006. "...La Corte protegió a un grupo de jefes de hogar desplazados por la violencia, quienes habían realizado durante varios años gestiones para adquirir un inmueble rural ante el INCODER, sin que hasta la fecha de presentación de la tutela se hubieran beneficiado por alguno de los programas públicos. La Corte rechazó la inoperancia estatal ante los reclamos presentados por las familias desplazadas, reitero que los defectos institucionales identificados en la T-025 de 2004 continuaban presentándose y resalto que las instituciones estatales encargadas de la atención a la población desplazada existían "para brindar soluciones a las necesidades sociales y ellas en este caso no han sido el mejor ejemplo de eficacia y celeridad, como principios que gobiernan la función administrativa (Art. 209 C.P.9." En consecuencia ordenó a las autoridades adoptar "medidas efectivas para proveer los accionantes con soluciones en materia de vivienda y una asignación de tierra que (...) les permita reorientar y desarrollar en ese nuevo lugar su proyecto de vida, advirtiéndose que si bien, como ya se ha dicho, los desplazados tienen el

182

derecho a la asignación de predios, ello no significa que necesariamente se les asignarán los escogidos por ellos, pues dicha determinación debe ser realizada por el INCODER como autoridad competente, de conformidad con a las normas pertinentes.”

T-159 de 2011. “...De igual manera en la declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas en la sección II de dicho documento se consagraron los derechos a la reubicación de viviendas y el patrimonio para la población desplazada: “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente”.

IV.2.3.- El marco legal de la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas está definido por la Ley 1448 de 2011 **“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”**, que se ha reglamentado a través de los siguientes decretos:

Decreto 4633 de 2011: a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Decreto 4634 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos Rom o Gitano.

Decreto 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4829 de 2011, por el cual se reglamenta el capítulo 111 del Título IV la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.

IV.2.4.- Así, la Ley y sus decretos reglamentarios consagran el marco institucional, procedimental y sustancial para que el Estado provea las diferentes medidas a las que tienen derecho las personas víctimas del conflicto armado que se aglutinan básicamente en ese amplio segmento que conforma la población desarraigada, desplazada y despojada de sus bienes, y que por ende se les pueda brindar efectivamente los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas económicas, incluyendo medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, flexibilización de pasivos y acceso a créditos, y las demás establecidas en la misma ley. Adicionalmente, es necesario precisar que en relación con las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 se complementan con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica para la población víctima de este delito establecidas en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la reglamentan; igualmente, con lo determinado en materia de goce efectivo de derechos de esta población, que no le sea contrario a la Ley de víctimas. Esta particular disposición se ve reflejada a su vez en el capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se establecen lineamientos de política pública dirigidos a la población víctima de tan execrable crimen, los cuales hacen referencia al goce efectivo de derechos de la población víctima de este flagelo haciendo especial énfasis en aquellos que contribuyen al restablecimiento social y económico.

IV.2.5.- BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD:

Conforme los postulados consagrados en el artículo 27 de la Ley 1448 de 2011, **“En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el interprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de**

escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de la persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas."

IV.2.5.1.- A manera de complemento del anterior precepto legal, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia prevé el llamado **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**, como la normatividad con base en la cual la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos jurisprudenciales, de los cuales entre otros se destaca el siguiente: *"...Los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, así como la Interpretación que de ellos hagan los órganos competentes para tal fin, forman parte del bloque de constitucionalidad, y; en ese sentido, se convierten en parámetros de Interpretación y determinación del alcance de los derechos reconocidos en la Constitución y de la aplicación que de los mismos realicen los operadores judiciales"*. En ese sentido hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad de Colombia "los Convenios de Ginebra, que regulan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los casos de conflictos armados Internacionales y conflictos armados no internacionales (o internos), pues han sido incorporados a nuestra normatividad por medio de leyes. Igual sucede con el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

IV.2.5.2.- La Jurisprudencia constitucional, ha establecido de conformidad con los preceptos consagrados en los artículos 94 y 214 de la Constitución Nacional, que existen Normas Internacionales que constituyen el marco mediante el cual se puede direccionar la ejecución de la política pública de Restitución de tierras Despojadas en Colombia, resaltando los que a continuación se enuncian: **1) Principios sobre reparaciones de las Naciones Unidas; 2) Principios Internacionales relativos a la restitución de Viviendas y Patrimonio de los refugiados y la población desplazada (PRINCIPIOS PINHEIRO) y 3) Principios Rectores de los desplazamientos conocidos como PRINCIPIOS DENG.**

Así ha dicho la Corte: "Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra **(de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras)**, tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado. Ciertamente, si el derecho a la reparación Integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas **(los llamados principios Deng)**, y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (Constitución Política Art 93.2)."

103

IV.2.5.3.- Respecto de lo que también se puede entender como **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**, es sabido y últimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política, puesto que hay un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que lo conforman y que comparten con los artículos de dicho texto la mayor jerarquía legal de orden interno. En este sentido, la noción de "bloque" transmite la idea de que la Constitución de un Estado es mucho más amplia que su propio texto, al existir disposiciones e instrumentos, que también son normas constitucionales.

IV.2.5.4.- Acoplamiento a la normatividad nacional del **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991**. Bajo la égida de la nueva Constitución, se marcó una nueva pauta para aplicación de las disposiciones internacionales al orden constitucional interno. Aunque no fue sino a partir el año 1995 que la Corte Constitucional adoptó el concepto de bloque de constitucionalidad - tal como se utiliza hoy en día - muchos de los fallos producidos antes de ese año reconocieron ya la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales. El primer elemento en contribuir a este cambio fue la introducción en el texto constitucional de seis importantes artículos que redefinirían los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Estos fueron:

- a) El artículo 9º, el cual reconoció que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia;
- b) El artículo 93, según el cual "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."
- c) El artículo 94, que establece que "la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."
- d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2º: "No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetaran las reglas del derecho internacional humanitario".
- e) El penúltimo inciso del artículo 53 que preceptúa: "Los convenios internacionales del tratado debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", y
- f) El artículo 101 inciso 2º que dice: "Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".

IV.2.5.5.- En conclusión, todo el ordenamiento, en su contenido positivo y en su aplicación práctica, debe adecuarse a las normas de jerarquía constitucional. Dando por sentado que las normas que integran el bloque de constitucionalidad son verdaderas normas constitucionales, bien vale entonces acoger las siguientes consideraciones de la Corte que obran como síntesis de la subordinación jurídica a que se ha hecho referencia.

En cuanto a la protección de derechos de los desplazados respecto de sus bienes, éstos se encuentran debidamente consagrados dentro del rubro de las obligaciones que tiene el Estado, diseñando para el efecto pautas de comportamiento para que las autoridades, puedan evitar abusos y como consecuencia directa de ello, se garantice el uso y goce efectivo de sus posesiones o propiedades.

IV.2.5.6.- Estos son los denominados *Principios Rectores de los Desplazamientos Internos*, que se sintetizan así:

PRINCIPIO 21:

- 1.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.
- 2.- La propiedad y las posesiones de los desplazados Internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los siguientes actos:
 - a) expolio;
 - b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;
 - c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares;
 - d) actos de represalia; y
 - e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

3.- La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ilegales.

PRINCIPIO 28

1.- Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidades primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

PRINCIPIO 29

1.- Los desplazados Internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos."

IV.2.5.7.- De conformidad con los PRINCIPIOS PINHEIRO, sobre la RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS, tales elementos resultan fundamentales en la justicia restitutiva, pues su esencia radica en impedir efectivamente que se vuelvan a producir situaciones de desplazamiento, para así ayudar a consolidar el logro de la paz. Es así, que todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal Independiente e imparcial, para lo cual los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en esta especial clase de justicia, sin olvidar que éste es un derecho en sí mismo y por lo tanto es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista razón en su reclamación.

IV.2.5.8.- Que conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, específicamente el 9º, el cual establece que **"Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma"** y por tal razón, la comunidad en bloque solicita a instituciones del Estado que les amparen sus derechos.

V. CASO CONCRETO:

V.1.- Descendiendo al estudio del caso particular que ahora nos ocupa, es preciso tener en cuenta que a lo largo de la actuación desplegada en la fase

184

administrativa, se demostró plenamente el marco de violencia en que se vieron envueltas muchas regiones del país, en las décadas de los 80, 90 y primeros años del 2000 en la parte norte del Tolima, con gran influencia en la zona rural del Municipio de Líbano, especialmente en las veredas que lo conforman principalmente Tierra dentro, San Fernando, Las Delicias del Convenio, locación última donde queda ubicado el predio objeto de restitución y formalización, destacando especialmente que los hechos violentos son atribuidos a subversivos del ELN por medio del frente Bolcheviques del Líbano, las autodenominadas FARC frente Tulio Varón y la columna Jacobo Prias Alape; el ERP y las autodefensas o grupos PARAMILITARES frente Omar Isaza y Bloque Tolima. Tales actos delictivos, fueron realizados por dichos grupos, con asentamiento en el sector de Líbano y otros municipios, bajo acciones de sangre y fuego desplegadas a partir del año 2000 y hasta aproximadamente el 2010, incluido entre ellos el desplazamiento masivo del corregimiento Santa Teresa ocurrido el domingo 17 de agosto de 2003. Dicha violencia generalizada causó miedo en los pobladores, pasando de ser una experiencia individual, subjetiva, a una realidad colectiva, que configuró un cuadro dantesco, que fue oportunamente difundido en diversos medios de comunicación hablados y escritos, como el periódico El Tiempo y otras publicaciones citadas en los pie de página de la solicitud. (Fls.4 a 5 vuelto).

V.2.- Acreditada entonces la ocurrencia de tan lamentables hechos violentos exigidos por la ley 1448 de 2011, centra el Despacho su atención en el estudio de las peticiones deprecadas, las cuales se abordarán conforme se advirtió en la descripción del problema jurídico, de acuerdo con la vinculación jurídica de la víctima solicitante con el inmueble objeto de restitución y formalización que no es otra que la de poseedora. Así las cosas, procede realizar el análisis jurídico de la presente solicitud bajo la cuerda propia del proceso o acción de pertenencia derivada de los actos posesorios desplegados por la víctima.

V.3.- OBJETO DE LA ACCION DE PERTENENCIA. Apoyado este instrumento jurídico en la prescripción ordinaria o extraordinaria adquisitiva de dominio, edificada a su vez sobre el hecho de la posesión, en los términos previstos en la ley sustancial, ésta constituye un modo originario para adquirir el derecho real de dominio, cumpliendo así una función jurídico social de legalizar y esclarecer el derecho de propiedad respecto de una situación fáctica de posesión, facilitando a los legitimados para incoarla el acceso a la administración de justicia, a fin de legalizar una situación de hecho, previo el cumplimiento de los presupuestos legales.

V.3.1.- En esta clase de procesos, la piedra angular la constituye la posesión material sobre los predios a usucapir, figura que en los términos del art. 762 del Código Civil, constituye la aprehensión material del bien con ánimo de señor y dueño; es decir, que su objetividad se exterioriza mediante el ejercicio de actos físicos que conllevan la conservación y explotación del bien de acuerdo a su naturaleza, y su objetividad que se manifiesta como la consecuencia inequívoca de realizar los actos posesorios como dueño, hechos que le dan el carácter de exclusiva y autónoma, situación que para esta clase de proceso, debe persistir en forma pública, pacífica y continua por el espacio o período de tiempo que establezca la ley. En cuanto a la naturaleza de la posesión, es como toda relación del hombre con las cosas, de índole material, caracterizada por la presencia de un poder de hecho sobre el objeto de la misma. Es así como se entiende que el derecho real de dominio (o propiedad), en oposición a la posesión como poder de hecho, denota un poder jurídico. La relación posesoria, a su vez, está conformada por un CORPUS, elemento objetivo que hace referencia a la relación material del hombre con la

cosa, y el ANIMUS cuyo contenido es la voluntad de adelantarla con ánimo de señor y dueño, excluyendo el dominio ajeno (elemento subjetivo).

V.3.2.- En cuanto a la buena fe en la POSESIÓN, según el artículo 768 de nuestro Código Civil, es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así en los títulos translaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y el no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.

V.3.3.- La posesión a su vez conlleva insita dentro de sí la posibilidad de adquirir el derecho de dominio o propiedad, en los términos de los artículos 673 y 2512 de nuestro Código Civil, en los que encuentra consagración legal la PRESCRIPCIÓN. Respecto a la institución, conviene destacar que según los términos del art. 2512 del Código Civil; “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercitado dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído en las condiciones legales (Art. 2518 ibídem). Por tanto, esta figura no sólo constituye un modo de adquirir las cosas ajenas sino también de extinguir las acciones o derechos ajenos. Dentro de esos derechos susceptibles de extinguirse está el de dominio o propiedad, consistente en la facultad de usar (ius uti), gozar (ius frui) y disponer (ius abuti) de las cosas corporales, siempre que no vaya contra la ley o derecho ajeno (art. 669 Código Civil).

V.4.- Para que la prescripción tenga éxito, se requiere haber poseído la cosa durante el lapso legal, esto es, de veinte (20)¹ o diez (10) o cinco (5) años², con base en la legislación que actualmente rige tal fenómeno. Sin embargo, tratándose de la formalización de la propiedad a través de la acción restitutoria de tierras despojadas o abandonadas, conjugada con la prescripción adquisitiva de dominio hay que tener en cuenta que el inciso 4 del art. 74 de la Ley 1448 de 2011, tipificó que: *“(...) el despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término exigido por la normatividad (...)”*. De ahí que, dicha regla asumirá un rol vital para decidir sobre la pretendida usucapión.

Bajo ese calco, siendo la posesión alegada por la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ** desde el año 1999, requiere que el animus y el corpus se presenten durante el término de diez (10) años conforme lo establece la Ley 791 de 2002 reformativo del artículo 2529 del Código Civil, tiempo que desde ya se dice, está más que cumplido, teniendo en cuenta que a pesar del temporal y forzado abandono de sus bienes por parte de la víctima, sus derechos posesorios no se considera que hubieren sufrido interrupción conforme lo indicado en líneas anteriores.

V.5.- Atendiendo las normas citadas, para la prosperidad de la acción instaurada, es imperiosa la concurrencia de los requisitos que a continuación se enuncian: **i)** que el asunto verse sobre cosa prescriptible legalmente; **ii)** que se trate de cosa singular que se haya podido identificar y determinar plenamente y que sea la misma descrita en el libelo; y **iii)** que sobre dicho bien ejerza, quien

¹ Artículo 2529 del Código Civil

² Ley 791 de 2002

pretende adquirir su dominio, posesión material, pacífica, pública e ininterrumpida por espacio no inferior a diez o cinco años, bajo la nueva norma (Ley 791 de 2002), temporalidad demostrada en el proceso.

V.6.- LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE PARA INVOCAR LA ACCIÓN DE PERTENENCIA. Como se dijera en otro aparte de esta providencia, de acuerdo con el numeral 5° del art. 407 del Código de Procedimiento Civil, el sujeto pasivo de la demanda relativa a declaración de pertenencia, será toda persona titular de derechos reales principales sobre el bien a usucapir, esto es, el propietario, el usuario, el habitador y el usufructuario.

V.7.- Así las cosas, del acervo probatorio recaudado la víctima solicitante demostró haber realizado hechos posesorios sobre el bien a usucapir a nombre propio y de sus hermanos **JOSÉ FERNANDO**, identificado con cédula de ciudadanía No.14.259.051 expedida en Líbano (Tol) y **LUIS ARNULFO LÓPEZ**, junto con los demás miembros de su núcleo familiar, que para el momento de los hechos estaba compuesto por **PARBY MAYERLI** y **JUAN ROBINSON PINILLA LÓPEZ** (hijos), **MAURICIO MARIN FRAIDE** (yerno), identificados con las cédulas de ciudadanía No. 52.791.295, 80.825.724 y 79.770.145 respectivamente; **LUIS ANTONIO GASPAS** (hijo de crianza) sin identificación, y **DEBORA MILDREY PINILLA LÓPEZ** y **HAMBLEIDY JULIET PALOMINO PINILLA** (nietas), identificadas con T.I. 1.007.165.723 y 1.007.165.722 respectivamente; desde mayo 18 del año **1999**, fecha en la que fallece su señora madre **ADALINDA LÓPEZ (q.e.p.d.)**, quien a su vez era hija de la señora **MARÍA ESTRELLA LÓPEZ (q.e.p.d.)**, que aparece registrada como titular de derecho real de dominio, por haber adquirido el fundo objeto de restitución mediante compraventa suscrita con el señor **ELISEO OLAYA**, a través de la escritura pública No. 291 de mayo 5 de 1944 de la Notaría Única del Círculo de Líbano, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del citado municipio en junio 3 de 1944 y que consta en la anotación No. 1 del folio de matrícula No. 364-23304, pero dicha posesión fue interrumpida en el año 2002, y como consecuencia de ello no ha retornado al inmueble, pero hace aproximadamente cuatro (4) años se encuentra habitado por su hermano **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, junto con su esposa **ADELAIDA BERNAL ANZOLA** y dos hijos **JOHAN ESTIVEN BERNAL** y **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ BERNAL**. Así las cosas, la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, ha ejercido su calidad de poseedora en el inmueble denominado Registralmente **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE**, por más de dieciséis años, tiempo más que suficiente para adquirir por prescripción extraordinaria el derecho de dominio sobre el mismo.

V.8.- En el mismo orden de ideas, los artículos 1° y 5° de la Ley 1448 de 2011, que consagran los principios generales que gobiernan el resarcimiento de las víctimas, prevén entre otros el de la buena fe, para que éstas puedan acreditar los daños sufridos o los soportes de sus pedimentos, por cualquier medio legalmente aceptado, bastándoles en consecuencia probar de manera sumaria el daño sufrido. Estando enmarcados los principios de la justicia transicional en tan laxos mecanismos probatorios, conforme a los postulados consagrados en los artículos 77 y 78 de la ley en mención, los cuales hacen referencia a las presunciones de despojo y de inversión de la carga de la prueba, bastará entonces con el acervo testimonial y documental recaudado tanto en la fase administrativa como en la judicial, para presumir como ciertos los actos posesorios desplegados por la solicitante.

V.9.- Ahora bien, siendo la posesión un hecho, se convierte en valiosa la información suministrada tanto en la declaración de la propia víctima solicitante como de quienes pueden dar fe de dichos actos posesorios, pues de ellas se colige que la posesión fue ejercida por la señora **MARÍA ADALINDA**

LÓPEZ, en forma quieta, pacífica y tranquila, hasta la ocurrencia de los nefastos hechos de violencia, desplegados por grupos armados organizados al margen de la ley, como ya quedó plasmado en otro aparte de esta sentencia.

V.10.- En el caso que ahora se debate, ya se encuentra plenamente establecido que desde el punto de vista axiológico, de lo acaecido en la investigación adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras, el predio que se pretende prescribir, pues está debidamente identificado y alinderado e igualmente cuenta con el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente; asimismo, están acreditadas las coordenadas planas y geográficas, con sistema de coordenadas planas – MAGNA COLOMBIA BOGOTÁ – y sistemas de coordenadas geográficas MAGNA SIRGAS. De la misma manera con el fin de probar el requisito de la posesión material con ánimo de señor y dueño, es decir, con las exigencias del art. 762 del Código Civil, respecto de la solicitante **MARÍA ADALINDA LÓPEZ** podemos afirmar que se recaudaron los siguientes elementos de prueba:

V.10.1- DECLARACIÓN de GILBERTO CARDENAS CRUZ (CD FI.24). Manifiesta que cuenta con 62 años de edad, casado, actualmente vive en Ibagué. Indica que conoce a la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, de la vereda El Descanso, desde pequeños, cuando parcelaron la finca objeto de restitución, hace aproximadamente 35 años. Agrega, que la solicitante permanecía en la casa y sus hijos trabajaban cortando caña, reconociéndola como propietaria del predio ubicado dentro el corregimiento Convenio. Relata no conocer los motivos de su desplazamiento, pero agrega que se vivía una situación de violencia generalizada, donde acusaban a la mayoría de la gente de ser auxiliadora de la guerrilla. Añade que el predio se encuentra habitado por otras personas sugiriendo que puede ser el hijo de ella quien lo habita.

V.10.2.- AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN de la solicitante señora MARÍA ADALINDA LÓPEZ (CD FI.24 y CD FI.172). Relata que nació en el predio aquí solicitado, que vivió con su madre **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, sus hermanos **JOSÉ FERNANDO** y **LUIS ARNULFO LÓPEZ**, y su abuela **MARÍA ESTRELLA LÓPEZ**, que falleció en el año 1972. Que su señora madre **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, que padecía una discapacidad, quedó al cuidado de la solicitante. Su hermano **LUIS ARNULFO**, había construido dos piezas y ella se las compró para seguir construyendo, ya que **LUIS** se fue definitivamente de la zona entre los años 1985 o 1986 y nunca más se volvió a saber de él. Ella siguió en el predio realizándole arreglos, construyendo la casa en material, porque era de madera y cuidando a su madre, explotándolo junto con su hermano **JOSÉ FERNANDO**, su ex esposo y sus hijos. Cuando fallece su mamá, **JOSÉ FERNANDO**, se marcha y queda ella habitando y trabajando el fundo directamente, desde el año 1999; que construyó una caseta al borde de carretera donde funcionaba un negocio que empezó a producir en el año 1998, donde vendía de todo, la casa paterna era de tabla y se fue construyendo en material, la casa lote contaba con servicios de agua y luz, mejoró el predio con cultivos de plátano y yuca, tenía gallinas y cerdos, de estos últimos quedo debiendo a la UMATA. Agrega que en la zona operaban los Bolcheviques, que siempre han existido, ERP y los Paramilitares que llegaron aproximadamente desde el año 2001 cuando se tomaron el pueblo, amenazaban a las personas, hacían retenes, hostigamientos y los ponían a trabajar. Añade que de allí salió desplazada junto con su núcleo familiar conformado por sus hijos **PARBY MAYERLI** y **JUAN ROBINSON PINILLA LÓPEZ**, sus nietas **DEBORA MILDREY PINILLA LÓPEZ** y **HAMBREYDI JULIET**, su yerno **MAURICIO MARIN FRAYDE** y su hijo de crianza **LUIS ANTONIO GASPAS**, en enero 7 del año 2002 a las 6:30 P.M., porque la acusaban de ser informante, porque finalizando el año 2001 estaba en su negocio, llegaron 4 paramilitares armados en un carro Renault azul compraron

296
186

unas gaseosa y en el momento en que estos se fueron, llegó la policía, quienes le preguntaron si había visto un vehículo que cumplía con la descripción antes detallada; ella negó haberlos visto por temor y los policiales le contaron que éstos hombres acababan de matar a JORGE "EL ROLO", carnicero del Convenio, al día siguiente a eso de las 3 de la mañana bajo de la casa al negocio a preparar tinto para la venta, cuando llegaron otros hombres que no sabe cómo se dieron cuenta de que la policía estuvo en su negocio y solo llegaron a amenazarla a ella y a su familia, que conocían a sus hijos y sus nietas, que debía quedarse callada viera lo que viera; a pesar de las citaciones recibidas por parte de las autoridades ella guardó silencio por la seguridad de su familia. Luego mataron a otro carnicero al que le decían "EL OJO DE PLATA", y también tiene conocimiento de las amenazas que recibió el señor EFRAIN SEGURA. Indica que siguió trabajando en sus cultivos normalmente junto con su familia, en ese tiempo ya se encontraba separada y le tenía arrendado un apartamentico en el predio a una pareja llamados doña GLADYS y don LISIMACO. Continuaron las amenazas, porque ella vivió muchos años con un Sargento Mayor del Ejército, y como a los demás habitantes para que pagaran, los paramilitares la citaban al Polideportivo del Descanso; todas esas cartas que contenían las amenazas y citaciones quedaron en la Unidad de Víctimas cuando realizó las declaraciones. Ella decide quedarse hasta el día del desplazamiento cuando al llegar a la casa procedente el casco urbano del Líbano, vio a sus dos trabajadores en una actitud muy extraña, no le contestaban, no veía ni a sus hijos, ni a sus nietas, al entrar vio que tenían a su hija, su yerno y sus nietas amenazadas con armas, diciéndole que le daban hasta las 7 de la noche para irse, de lo contrario le arrancarían su lengua; se fueron en un camión que transporta plátano hacia la ciudad de Bogotá, el predio quedó completamente abandonado con todos sus enceres, elementos de un negocio de lava autos que tuvo en Guayabal como motobombas, negocio que le tocó recoger y llevar al lote porque su señora madre se agravó, un cultivo de yuca y todo lo que tenía en su negocio de la caseta y adicional que esta última había sido adquirido por la Oficina de Planeación y la Alcaldía y todo se lo llevaron, lo acabaron. Dice que estando en Bogotá residieron el Gobierno le dio una casa lote, como no le alcanzaba el dinero compró en Patio Bonito en el Jazmín, y trabajaba en reciclaje, pero se entraron los ladrones y le violaron a su hija, en dicha ciudad vivió hasta el año 2008. En cuanto su relación con el inmueble solicitado en restitución indica, que es la herencia que le dejó su abuela, quien aparece registrada como propietaria del predio, a su señora madre, quien era muda y como ya lo había manifestado, estaba bajo el cuidado de la aquí solicitante, al fallecer su madre un año antes del problema, queda el predio tanto para ella como a sus hermanos LUIS ARNULFO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ. Agrega que actualmente el predio se encuentra habitado por su hermano JOSÉ FERNANDO y su mujer, y que no es su deseo regresar, porque siente mucho miedo por la seguridad de sus hijos y nietas, deseando que le den un ranchito para poder reformar su vida, actualmente se encuentra residiendo en la Vereda La Palmita de Alvarado Tolima en una casa donde le dan posada y pasan muchas necesidades. Por último, a través de su apoderado de la Unidad de Restitución de Tierras, presenta escrito donde manifiesta su deseo de regresar y recuperar su predio para acceder a todos los beneficios y garantías a los que puede tener derecho.

V.10.3.- DECLARACIÓN de EFIGENIA VÁSQUEZ CUBILLOS (CD FI.24). Revela que tiene 49 años de edad, es viuda, residente en la Vereda El Descanso del Corregimiento Convenio, desde pequeña, conoce a la solicitante desde los 8 años de edad porque eran vecinas. Refiere que la peticionaria vivió en Unión Libre con RAFAEL hasta uno o dos años antes del desplazamiento, con quien no tenía hijos pero adoptaron a DÉBORA y TÓNÓ. Afirma que la víctima tenía una casa lote construida en bloque, pisos en

cemento y techo de zinc, en el lote tenía cultivo de café y plátano, y a borde de carretera una caseta, donde funcionaba un negocio de venta de comida, gaseosas, tintos y una cancha de tejo, dicho predio lo adquirió por herencia que le dejó su abuela MARÍA ESTRELLA a su madre ADALINDA y de ésta a MARÍA ADALINDA LÓPEZ. Cuenta que el fundo posee los servicios de agua y luz que eran cancelados por MARÍA ADALINDA, quien vivía allí y administraba todo el lote como el negocio. Respecto a los actores violentos, dice que personalmente nunca se le presentó ninguno pero que veía gente desconocida que llegaba, hicieron una reunión sin identificarse, pedían plata y amenazaban que si no daban los picaban, atemorizando a la gente, se decía que eran paramilitares y guerrilla. Asegura que la solicitante si es víctima de desplazamiento aunque no le creyeron hasta que la vieron salir con su familia y tan solo una maletica, sin que regrese a la fecha. En cuanto al estado actual del predio, expresa que ahora lo habita un muchacho de nombre JOSÉ, en la casa que queda en la parte de arriba del predio, porque un derrumbe se llevó la casa donde MARÍA ADALINDA tenía el negocio, solo hay unas matas de plátano y lo demás es rastrojo. Respecto al orden público actual en la zona, expone que se dice que por la noche pasan personas extrañas pero no se han visto problemas.

V.10.4.- DECLARACIÓN de ENRIQUE VÁSQUEZ ARIZA (CD Fls.24), quien revela que tiene 84 años de edad, separado, agricultor, residente en la vereda El Descanso del Corregimiento Convenio / El Rubí de Líbano Tolima desde el año 1970, fecha desde la cual conoce a MARIA ADALINDA LÓPEZ, quien ya habitaba allá con su familia. Hace referencia a que ella ya tenía hijos cuando se juntó con el señor RAFAEL, única pareja que le conoció, pero que para la época del desplazamiento ya se encontraban separados, y la solicitante solo vivía con su hija mayor de nombre PARBY. En cuanto al predio objeto de restitución, refiere que es el único que le conoce y que lo obtuvo como herencia que recibió de la mamá, que consiste en una casa de bloque, y el lote donde habían unas matas de plátano, además que cuenta con los servicios de agua y luz, allí tenía la solicitante un negocio a borde de carretera donde vendía plátano, gaseosa y comida. En relación con los hechos de violencia, solo escuchó comentarios y lo que la víctima le comento cuando iba saliendo desplazada con algunas pocas cosas y no ha regresado, actualmente en dicho fundo vive JOSÉ, pero no tiene cultivos, está muy desmejorado y enrrastrojado. Refiere que el orden público del Líbano es tranquilo no hay problemas.

V.10.5.- DECLARACIÓN de ALIRIO GÓMEZ RONDÓN (CD Fls.24), con 49 años de edad, soltero, bachiller académico, de profesión pintor de carros, residente de la Vereda Palmita del Municipio de Alvarado Tolima. Expone que vivió en la Vereda El Descanso corregimiento Convenio del Municipio de Líbano Tolima, desde el año 1990 hasta el año 2006, y fue en 1990 cuando conoció a la señora MARÍA ADALINDA LÓPEZ, porque le pintó el carro que tenía junto con su esposo RAFAEL, además porque iba a jugar tejo y tomar cerveza en el negocio de ella. Dice que para el momento del desplazamiento, la solicitante ya se había separado del señor RAFAEL y solo vivía con su hija PARBY, su yerno MAURICIO, su nieta DEBORA y un niño que ella adoptó llamado TOÑO. Refiere que actualmente PARBY vive con su esposo MAURICIO en Bogotá, y TOÑO está prestando servicio. Indica que MARÍA ADALINDA, tenía una casa en la parte superior del predio aquí solicitado, donde vivía don Rafael y otra a bordo de carretera donde funcionada el negocio, mismo donde vendía lo que producía la finca, como plátanos, también tenía criadero de cerdos y gallinas, el fundo contaba con servicios de luz y agua que pagaba la solicitante. De igual manera, refiere que escuchaba sobre la presencia de grupos al margen de la ley como los

187

Bolcheviques, que siempre han estado en la zona, y las AUC, que asesinaban, amenazaban aduciendo que eran colaboradores de la guerrilla, como en el caso de la señora MARÍA ADALINDA, que salió desplazada en el año 2002 junto con su núcleo familiar conformado por su hija PARBY, su yerno MAURICIO, una nieta pequeña y dos hijos adoptivos llamados DEBORA y TOÑO. Menciona que no han retornado y desconoce el estado actual del inmueble y el orden público del municipio del Líbano.

V.10.6.- DECLARACIÓN de JOSÉ FERNANDO LÓPEZ (CD Fls.172), natural del municipio de Líbano Tolima, con 47 años de edad, cursó hasta octavo de bachillerato, refiere que su relación con el predio objeto de restitución se da porque él es nieto de la señora MARÍA ESTRELLA LÓPEZ, quien falleció hace mucho tiempo atrás, pero que aparece registrada como dueña de éste, y por eso se consideran dueños del mismo. Indica que vivió toda su niñez en el corregimiento El Convenio hasta el año 1986 o 1988 aproximadamente, luego se fue para los municipios de Ataco, Santiago Pérez y Planadas, cursando estudios por intermedio del SENA y un colegio Americano, eso fue luego de la avalancha de Armero; de allí salió para Bogotá donde unas amistades a trabajar en Protela LTDA, ubicado en Álamos Norte. Manifiesta que siempre escuchó de la presencia de los Bolcheviques. Agrega que regreso nuevamente en el fundo y allí vía con su mamá y con su esposa de nombre ADELAIDA BERNAL ANZOLA para los años 91 o 92, que ellos vivían allá dos o tres años y volvían a irse, para esa época se veía grupos como de 15 o 20 hombres patrullar con diferentes tipos de uniformes y armas y hacían retenes en la orilla de la carretera. Refiere que volvió y salió hacia los lados de Junín para administrar una finca, quedando su hermana MARÍA ADALINDA LÓPEZ, junto con su mamá en el inmueble. Dice que no ha instaurado ninguna acción para reclamar el predio, sólo que cuando fue informado de que su hermana estaba reclamando el predio en restitución y posiblemente lo iban a despojar de allí, les enseñó documentos indicando que también se sentía propietario por ser nieto de la dueña. Refiere que la reclamación de su hermana es justa, porque ella perdió muchas cosas ahí, que ella había remodelado la vivienda, perdió una caseta muy bien instalada no sabe si fue por la naturaleza o intervención de otra clase. Hasta ahora para las diligencias se reencontraron en Bogotá y le comentó sobre lo que le pasó, y lo que le han informado los vecinos respecto a cómo fueron los últimos días de su hermana en el predio, cuando llegaron grupos armados al margen de la ley, sin conocer con exactitud cual, le dio término de horas para que desocupara. Que el predio quedó abandonado aproximadamente desde el 2002 por unos 8 o 9 años y cuando él regreso en el año 2010 o 2011 estaba invadido por dos familias conocidas de la vereda, quienes le indicaron que alguien que estaba cuidando el lote se los había arrendado, entonces les dio un tiempo para que desocuparan pero el inmueble no era el mismo, estaba acabado, ya luego se fue a vivir en él y allí reside actualmente con su esposa e hijos. Revela que sabe que su hermana cuando se fue, se dirigió a Bogotá, pero que ha estado de un lugar para otro, ahora se encuentra en Alvarado (Tolima) pero no sabe exactamente, porque ella le indicó que por seguridad era mejor que no supieran donde está. Repite que la reclamación de su hermana es justa por lo que perdió, pero que él también se considera dueño del predio por ser nieto de la dueña, pero no se opone a que se restituya el predio para él y para su hermana. Agrega que tiene otro hermano de nombre LUIS ARNULFO LÓPEZ, que es el mayor de todos, debe tener unos 54 o 55 años, pero la última vez que lo vio fue aproximadamente en 1993 o 1994, cierta ocasión lo llamó diciéndole que vivía para los lados de Santa Isabel pero no volvió a saber de él. Cuenta que LUIS ARNULFO habitó en la CASA LOTE LAS BRISAS, desde la niñez hasta más o menos los 35 años. Indica que le consta que LUIS le hizo una promesa de venta a la hermana donde le vendía

los derechos de una construcción que él había hecho en el lote, y luego de eso se fue y no regresó. Aclara el declarante que no es víctima de desplazamiento, que habita el predio sin oposición, ha hecho algunas construcciones en el predio, en cuanto al cambio de zinc, ha puesto más servicios, ha pagado servicios que se debían, ha sostenido los cultivos de plátano que tiene el predio, pero no ha cancelado impuesto alguno.

V.10.7.- Por otra parte, la diligencia de inspección judicial fue realizada sobre el predio **CASA LOTE LAS BRISAS** (Fls.121 a 132), siendo atendida por el señor **JOSÉ FERNANDO LÓPEZ**, hermano de la solicitante, señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, y persona que habita el predio, quien manifestó que reside en él desde hace cuatro (4) años con su esposa **ADELAIDA BERNAL ANZOLA** y dos hijos menores de edad de nombres **JOHAN ESTIVEN BERNAL** y **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ BERNAL**, desde que llegaron desplazados de **OTANCHE** (Boyacá). En relación con el estado actual del fundo, indica que su conservación es regular y consta de una casa construida en material y ladrillo a la vista, con cuatro puertas de acceso, pero con ingreso principal por el solar que funge como cocina, donde se encuentra el horno para la elaboración del pan, por la adecuación y el cerramiento que ha hecho el señor **JOSÉ FERNANDO**. La vivienda consta de cinco (5) habitaciones, piso en cemento, techo en zinc, dos baños interiores, uno con sanitario solamente y en desuso y el otro con sanitario, lavamanos y ducha; una cocina interior en concreto y otra en madera, con techo en zinc y piso en tierra, con los servicios públicos de agua, luz y gas. Respecto a las mejoras dicen que la instalación del gas domiciliario. Agrega que encuentran cultivos de plátanos, aguacate, mandarinas y guanábana, no tiene pastos. Por último, manifiesta que los ingresos familiares de sus ocupantes los obtienen con la fabricación de pan en horno a gas.

V.11.- Entonces, analizadas en su conjunto la totalidad de las pruebas, podemos concluir que respecto al predio denominado Registralmente **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE**, ubicado en la Vereda **DELICIAS DEL CONVENIO**, Corregimiento **CONVENIO**, del Municipio de **LÍBANO (TOLIMA)**, reclamado en las presentes diligencias por la prescribiente señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, es evidente que ésta ejercía posesión ininterrumpida sobre el precitado bien desde que tomó posesión del mismo y hasta que sufrió el flagelo del desplazamiento, al que no ha podido retornar.

V.12.- Así, dicha posesión ha sido ejercida por la solicitante señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, por más de dieciséis años, en las condiciones que requiere la ley, mediante hechos señalados de dominio, ejecutados precisamente con ánimo de señorío y se ofrece a consideración como bastante en orden a la demostración que se pretende. Adviértase en éste sentido, que en ninguna de las fases se allegó prueba siquiera sumaria de alguna persona que hiciera oposición, refutara o contrarrestara la versión de la solicitante, por lo que han de tenerse sus afirmaciones como sinceras y responsivas en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que sus apreciaciones son concordantes y explícitas, otorgando la razón de sus declaraciones, llegando por tanto éste despacho judicial a la firme y absoluta convicción de que tales testificales se manifiestan idóneas para considerarlas con plena validez probatoria.

V.13.- Realizado entonces el recuento de los hechos de violencia, y comprobándose sin hesitación alguna la calidad de poseedores - víctimas - desplazadas, de la aquí solicitante, así como las demás vicisitudes que rodearon la solicitud de restitución del inmueble objeto de éste proceso, será pertinente entonces, habida cuenta de la discordancia encontrada entre los datos

suministrados por la solicitante, así como la información plasmada en el certificado emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la contenida en el Folio de Matrícula inmobiliaria suministrado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Líbano - Tolima, establecer, con base en el levantamiento topográfico actualizado realizado al inmueble denominado Registralmente LOTE LAS BRISAS y Catastralmente CASA LOTE, por personal técnico científico adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, tanto el tamaño, la alinderación y las coordenadas planas y geográficas reales que permitan individualizar el predio objeto de restitución, así:

V.13.1- EL INMUEBLE. Con base en el levantamiento topográfico y el informe técnico predial realizado al mismo (CD obrante a folio 24) como se indicó en el párrafo que antecede, se establece que el mismo se basó en coordenadas tomadas del plano topográfico, transformadas en el Magna Sirgas, logrando determinar con plena certidumbre que el verdadero y único tamaño del predio denominado Registralmente **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE** es de: **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (944Mts²)**. Por economía procesal, tanto los linderos como las coordenadas planas y geográficas se reproducirán en forma literal en la parte resolutive de esta sentencia.

V.13.2- Según se desprende del artículo 69 del Decreto 1250 de 1970 "Ejecutoriada la sentencia declarativa de pertenencia, el registrador la inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien de que se trata". "Si esa matrícula no estuviere abierta o la determinación del bien que apareciere en ella, no coincidiera exactamente con la expresada en la sentencia, será abierta o renovada, según el caso, la respectiva matrícula, ajustándola por lo demás a las especificaciones establecidas en la presente ordenación, pero sin que sea necesario relacionar los títulos anteriores al fallo".

V.14.- En conclusión, el Despacho considera y reitera que en primer lugar no se presentó ninguna clase de oposición ni en la etapa administrativa ni en la etapa judicial; de otro lado, la víctima acreditó el cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos por la legislación vigente para acceder a la declaratoria de prescripción adquisitiva del derecho de dominio, como es el estar debidamente probado el requisito de tiempo establecido por la ley 791 de 2002, así como el hecho de ser coincidentes las declaraciones y las pruebas documentales, mediante los cuales se prueban los hechos posesorios desarrollados por la prescribiente sobre el predio objeto de restitución y formalización. Por último, es preciso tener en cuenta que todo ello en su conjunto se enmarca dentro de los parámetros de reparación transformadora consagrados en la misma ley 1448 de 2011.

V.15.- Finalmente, conforme a la normatividad atrás citada, se tendrán como fidedignas las pruebas recaudadas por vía administrativa a través de la Unidad de Restitución, corroborando así el favorable acogimiento de las pretensiones deprecadas, aclarando, que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 parágrafo 4º de la Ley 1448 de 2011, el título del bien deberá entregarse a nombre de la solicitante. Por tanto, y teniendo en cuenta lo declarado en la solicitud de restitución respecto a la composición del núcleo familiar de la solicitante al momento de la ocurrencia de los hechos, el título de propiedad corresponderá tanto a la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, y su núcleo familiar para el momento de su desplazamiento.

V.16.- De otra parte y en atención al cumplimiento los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994 es absolutamente necesario reseñar que el

hogar de la solicitante señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, figura con estado de beneficiario del subsidio familiar de vivienda urbana en la ciudad de Bogotá, el cual fue asignado mediante Resolución 51, fechada febrero 27 de 2007, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada (Fls.111 a 113), información que fue suministrada por la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA".

V.17.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 1448 DE 2011. La materia en comento, se refiere a la concesión de eventuales compensaciones, pero como se recordará, para ello hay que cumplir con una serie de requisitos que en el presente evento no cumplen las víctimas, razón por la cual sin necesidad de formular mayores elucubraciones, éstas se niegan, advirtiendo eso sí que de presentarse fenómenos naturales u otros factores desestabilizadores, en el control pos-fallo y previa la realización de los estudios especializados, así como la información que se allegue por parte de CORTOLIMA u otras entidades se podrá estudiar nuevamente el aludido petitem.

V.18.- GARANTÍAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES QUE BLINDAN LA RESTITUCIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE ABANDONADO. Como se ha decantado a lo largo de esta sentencia, es obligación del Estado otorgar junto con la restitución, un mínimo de garantías para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, sobre los derechos de uso, goce y explotación, así como la reparación de los daños causados. Consecuentemente con lo dicho, y atendiendo las condiciones de abandono del predio a restituir, se dispondrá que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordine en forma armónica con la Alcaldía de Líbano o la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Agricultura y demás entidades sobre la existencia de PROYECTOS PRODUCTIVOS, los cuales se deberán poner en conocimiento de la solicitante señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, para que en lo posible haga uso de ellos en el terruño respecto del cual ha ostentado la posesión.

VI.- DECISION

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima)** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1.- RECONOCER y por ende **PROTEGER** el derecho fundamental a la restitución jurídica y material y formalización de tierras de la señora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.954.756 expedida en Santa Isabel (Tolima) y su núcleo familiar para el momento de los hechos, compuesto por sus hijos **PARBY MAYERLI** y **JUAN ROBINSON PINILLA LÓPEZ**, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 52.791.295 y 80.825.724 respectivamente, su yerno **MAURICIO MARÍN FRAIDE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.770.145, sus nietas **DEBORA MILDREY PINILLA LÓPEZ** y **HAMBLEIDY JULIET PALOMINO PINILLA**, identificadas con las tarjetas de identidad No. 1.007.165.723 y 1.007.165.722, y su hijo de crianza **LUIS ANTONIO GASPAS**, por lo que en consecuencia se ordena **OFICIAR** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, para que procedan a la verificación, actualización o inclusión de los mencionados en el **REGISTRO DE VÍCTIMAS** que lleva esa entidad y así hacerse a los beneficios que ello implica.

2.- DECLARAR que la ciudadana víctima **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, ya identificada, y su núcleo familiar para el momento de los hechos, igualmente

identificado e individualizado, ha adquirido la propiedad por prescripción extraordinaria adquisitiva del derecho de dominio sobre el predio denominado Registralmente como **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE**, el cual cuenta con una extensión de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (944M²)**, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. **364-23304** y código catastral No. **00-01-0001-0102-000**, ubicado en la **Vereda Delicias del Convenio, del Corregimiento Convenio, del municipio de Libano (Tolima)**, siendo sus coordenadas y linderos actuales los siguientes:

Coordenadas:

PUNTO	COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD (° ' ")	LONG (° ' ")
1	1039881,884080	899013,831669	4°57'22,421"N	74°59'16,894"W
2	1039866,758480	898998,948399	4°57'21,928"N	74°59'17,376"W
3	1039858,306560	899016,214575	4°57'21,653"N	74°59'16,815"W
6	1039848,433190	899046,018542	4°57'21,333"N	74°59'15,847"W
7	1026887,99395	889666,07861	4°57'21,778"N	74°59'15,605"W
8	1039873,33723	899036,31039	4°57'22,143"N	74°59'16,164"W

Linderos:

NORTE:	Se toma como punto de partida el punto No. 1, en dirección Sureste en línea Recta alinderando con cerca de alambre hasta llegar al punto No. 8, colindando con el predio del señor JAIME LOZANO, con una distancia de 24.05 metros, desde este se continua en dirección Sureste en línea Recta alinderado con cerca de alambre hasta llegar al punto No. 7, colindando con el predio de la FAMILIA LAVERDE, con una Distancia de 20.56 metros.
ORIENTE:	Se parte desde el punto No. 7, tomando en dirección Suroeste en línea Recta alinderado con cerca de alambre hasta llegar al punto No. 6, colindando con el predio de la FAMILIA LAVERDE, con una distancia 15.57 metros.
SUR:	Se parte desde el punto No. 6, tomando en dirección Noroeste en línea Quebrada alinderado con cerca de alambre hasta llegar al punto No. 3, colindando con el predio de la FAMILIA LAVERDE, con una distancia de 32.77 metros, desde este se continua en dirección Noroeste en línea Recta alinderado con cerca de alambre hasta llegar al punto No. 2, colindando con el predio del señor ENRIQUE VÁSQUEZ, con una Distancia de 19.31 metros.
OCCIDENTE:	Partiendo desde el punto No. 2, se toma en dirección Noreste en línea Recta alinderado con la vía que comunica al municipio del Libano con el municipio de Amero de por medio hasta llegar al punto No. 1, volviendo y cerrando al punto de partida, colindando con el predio del señor JAIME LOZANO y con una distancia de 21.23 metros.

3.- ORDENAR igualmente la restitución jurídica y material del predio identificado y alinderado en el numeral **SEGUNDO** de esta sentencia a su **POSEEDORA SOLICITANTE** y ahora propietaria **MARÍA ADALINDA LÓPEZ** y su núcleo familiar para el momento de los hechos.

4.- ORDENAR el **REGISTRO** de esta **SENTENCIA** en el inmueble distinguido con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 364-23304 y Código Catastral No. 00-01-0001-0102-000, correspondiente al predio denominado Registralmente como **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE**. OFICIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Líbano (Tolima), quedando entendido que dicha entidad debe tener en cuenta las advertencias hechas en la parte motiva de este fallo para efectos registrales. Expídanse copias auténticas de esta pieza procesal y cuantas sean necesarias para su posterior protocolización en una Notaría Local, la cual servirá de título escriturario o de propiedad, conforme a los preceptos consagrados en el artículo 2534 del Código Civil y en lo conducente la Ley 1448 de 2011.

5.- DECRETAR la cancelación de las medidas cautelares que afecten el inmueble restituido e individualizado en este fallo y plasmadas en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. **364-23304**. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Líbano (Tol), para que proceda de conformidad.

6.- OFICIAR por Secretaría al Instituto Geográfico Agustín Codazzi "IGAC", para que dentro del perentorio término de dos (2) meses, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a la actualización del **PLANO CARTOGRAFICO O CATASTRAL** del predio denominado Registralmente como **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE** siendo sus linderos actuales los relacionados en el numeral **SEGUNDO** de ésta sentencia.

7.- DISPONER como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar durante el término de dos (2) años, siguientes al proferimiento de esta sentencia. Secretaría libre comunicación u oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Líbano (Tol) para que dicha inscripción se surta respecto a todas las fracciones del globo que se segregan del de mayor extensión y a las que se les asigne el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria de conformidad con lo ordenado en los numerales segundo, tercero, y sexto de ésta sentencia, e igualmente oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Nivel Central y Dirección Territorial Tolima, para que procedan de conformidad.

8.- Para llevar a cabo la realización de la diligencia de entrega material del inmueble a restituir, el Despacho de conformidad con los preceptos establecidos en el inciso segundo del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, comisiona con amplias facultades al señor Juez Promiscuo Municipal de Líbano (Tol), a quien se advierte que por tratarse de un proceso de justicia transicional, deberá realizarla dentro del perentorio término de **TREINTA (30)** días, contados a partir del recibo de la comunicación. Para la materialización de dicho acto procesal, contará con el apoyo logístico y colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima, entidad con la

190
que queda en libertad de realizar las gestiones o coordinaciones pertinentes, siendo sus características individuales y generales, como linderos y demás los plasmados en los numerales segundo, tercero y cuarto de esta sentencia. Secretaría libre despacho comisorio y las comunicaciones u oficios a que haya lugar al juzgado comisionado y a la referida entidad para que procedan de conformidad.

9.- Secretaría libre oficios a las autoridades militares y policiales especialmente Comando del Departamento de Policía Tolima, quienes tienen jurisdicción en el Municipio de Líbano (Tolima), para que en ejercicio de su misión institucional y constitucional, presten el apoyo que se requiera e igualmente para que coordinen las actividades y gestiones de su cargo, y así poder brindar la seguridad que sea necesaria a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia.

10.- De conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, se decretan como mecanismos de reparación en relación con los pasivos de la víctima solicitante ya identificada, tanto la **CONDONACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL**, que hasta la fecha adeude el inmueble denominado Registralmente como **LOTE LAS BRISAS** y Catastralmente **CASA LOTE**, identificado en el numeral **SEGUNDO** de esta sentencia, así como de cualquier otra tasa o contribución que hasta la fecha adeude, como la **EXONERACIÓN** del pago del mismo tributo, por el período de dos (2) años fiscales comprendidos entre el primero (1º) de enero de dos mil quince (2015) y el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Librese la comunicación u oficio a que haya lugar a la Alcaldía Municipal de Líbano y demás organismos o entidades departamentales o municipales a que haya lugar.

11.- Igualmente, se ordena que lo atinente a servicios públicos domiciliarios y deudas crediticias del sector financiero adquiridas por la víctima relacionada en el numeral PRIMERO de esta sentencia, **con anterioridad a los hechos de desplazamiento** y que se hubieren constituido en mora por ocasión del mismo, sean objeto de programas de condonación de cartera, que podrán estar a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Secretaría libre la comunicación u oficio a que hubiere lugar.

12.- En el mismo sentido, conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011, la solicitante poseedora **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, podrá acudir a los mecanismos previstos por la norma en cita, a fin de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Secretaría libre la comunicación pertinente a las entidades financieras y crediticias relacionadas en el aludido precepto legal, específicamente la SUBGERENCIA DE VIVIENDA RURAL del Banco Agrario, Oficina Principal de Bogotá y de Líbano (Tol).

13.- ORDENAR de acuerdo a lo reglado por los artículos 244, 246, 247, 250 y s.s., del Decreto No. 4800 de 2011, que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Nivel Central y Dirección Territorial Tolima, en coordinación con la Gobernación del Tolima – Secretaría de Desarrollo Económico, la Caja de Compensación Familiar del Tolima “COMFATOLIMA” y la Alcaldía Municipal de Líbano (Tol), dentro del perentorio término judicial de treinta (30) días, contados a partir del recibo de la comunicación y previa consulta con la víctima solicitante ya identificada, adelanten las gestiones

o coordinaciones que sean necesarias, para que a través de su programa de **PROYECTOS PRODUCTIVOS**, con cargo a los recursos de la **COORDINACIÓN GRUPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS** procedan a llevar a cabo la implementación de uno que se adecúe de la mejor forma, a las características del predio que es objeto de esta sentencia y a las necesidades de la mencionada. En el mismo sentido, y sin perjuicio de lo antes dispuesto, conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011, podrán acudir a los mecanismos previstos por la norma en cita, a fin de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Secretaría libré la comunicación pertinente a las entidades administrativas territoriales, financieras y crediticias relacionadas en el aludido precepto legal, específicamente Gobernación del Tolima, Alcaldía de Líbano (Tol) Banco Agrario, Oficina Principal de Bogotá y de Líbano (Tol).

14.- OTORGAR a la víctima solicitante **MARÍA ADALINDA LÓPEZ** y su núcleo familiar para el momento de los hechos, el **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL**, e igualmente el **SUBSIDIO PARA LA ADECUACIÓN DE TIERRAS, ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA e INCLUSIÓN EN PROGRAMAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS**, administrado por el **BANCO AGRARIO** y la **SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL INCODER**, a que tienen derecho, advirtiendo a las referidas entidades, que deberán desplegar tal diligenciamiento, dentro del perentorio término de **UN (1) MES, con PRIORIDAD Y ACCESO PREFERENTE CON ENFOQUE DIFERENCIAL**, contado a partir del recibo de la comunicación; en el mismo sentido, se pone en conocimiento de la víctima y de las entidades que éste se concede en forma **CONDICIONADA**, es decir, que se aplicará **POR UNA SOLA VEZ**, y única y exclusivamente en el predio objeto de restitución previa concertación entre la mencionada beneficiaria y los citados establecimientos, los cuales deberán diseñar y ejercer el control y vigilancia que sea necesario para el cumplimiento de la aludida condición, advirtiendo que previamente se deberá elevar CONSULTA ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de determinar si el subsidio de vivienda urbana otorgado al hogar constituido por la víctima MARÍA ADALINDA LÓPEZ y su núcleo familiar para el momento de los hechos (Fls.111 a 113), no constituye óbice para ser acreedora de un nuevo subsidio de vivienda ahora rural. Secretaría proceda de conformidad, librando las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

15.- ORDENAR al Ministerio de **AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, y a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, que por tratarse de un **PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL** para la materialización en el otorgamiento tanto del **PROYECTO PRODUCTIVO** como del **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL**, dispuesto en los dos numerales que anteceden, se dé **PRIORIDAD Y ACCESO PREFERENTE** a la víctima solicitante y beneficiaria ya citada, con enfoque diferencial dentro de los **Programas de Subsidio Integral de Tierras** (Subsidio para la adecuación de tierras, Asistencia Técnica Agrícola, e Inclusión en Programas Productivos), coordinando lo que sea necesario con la **PRESIDENCIA GERENCIA DE VIVIENDA del BANCO AGRARIO**, y la **SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, y demás **ENTIDADES TERRITORIALES** que prevé el art. 250 del Decreto 4800 de 2011. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

191

16.- ORDENAR a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordine en forma armónica con el señor Gobernador del Tolima y/o el Alcalde Municipal de Líbano Tolima, los señores Secretarios de Despacho tanto Departamental como Municipal, el Comandante de la Policía Departamento del Tolima, el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Director Regional del Instituto Nacional de Aprendizaje SENA, la Defensoría del Pueblo, integrar a la solicitante **MARÍA ADALINDA LÓPEZ**, y su núcleo familiar para el momento de los hechos, a la Oferta Institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado, esto es la elaboración de planes de acción, en el marco de planes de desarrollo a fin de lograr la asistencia y reparación integral de las víctimas, coordinando programas en materia de inclusión social, inversión social y seguridad, para la población desplazada de la Vereda Delicias del Convenio del Municipio de Líbano (Tol), enseñando la información pertinente a las víctimas y manteniendo enterado al Despacho sobre el desarrollo de los mismos

17.- NEGAR por ahora la pretensión **SUBSIDIARIA (COMPENSACIÓN)** del libelo incoatorio, por no cumplirse las exigencias establecidas en los artículos 72 inciso quinto y 97 de la Ley 1448 de 2011, advirtiendo que en el control pos fallo de ésta sentencia, de comprobarse que por efectos de la naturaleza o de otra índole no imputable a la solicitante, que afecte el inmueble, se podrán tomar las medidas pertinentes.

18.- NOTIFICAR personalmente o a través de oficio o comunicación telegráfica la presente sentencia de conformidad a los preceptos establecidos en el artículo 93 de la Ley 1448 de 2011, a la víctima solicitante, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Central y Dirección Territorial Tolima, al señor Gobernador del Departamento del Tolima, al señor Alcalde Municipal de Líbano (Tol) y a los Comandos de la Unidades Militares y Policiales indicadas en esta providencia. Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


CARLOS ARTURO PINEDA LOPEZ
Juez.-